



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N° 110355/2019

**AUTOS: CITRICOLA MARIA MAGDALENA S.A c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los, , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala, en virtud de la impugnación presentada por la empresa CITRICOLA MARIA MAGDALENA S.A. contra la Resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos n° 1643/2019 (DI CRSS), que hizo parcialmente lugar a la impugnación contra la resolución N° 178/2016 (DV RPOS). El acto administrativo consideró que la empresa relevada utilizó una cooperativa de trabajo a fin de satisfacer funciones propias de la empresa, violentándose, de este modo, la prohibición estipulada en el art. 4 de ley 25.877. El organismo sostuvo que la relación existente entre la empresa y los supuestos asociados, es de carácter laboral. La reliquidación efectuada -fruto de haberse hecho parcialmente al recurso de revisión- arrojó un monto de \$ 1.123.154,95.-, en concepto de aportes adeudados, \$ 1.506.753,68.-, por contribuciones adeudadas, \$ 5.151.148,73.-, en concepto de multa y \$ 6.816.407,34.-, en concepto de intereses al 30/08/2019.

En su libelo recursivo, la recurrente, solicita que se la exima del pago del depósito previo, en atención a la delicada situación patrimonial por la que atraviesa la empresa, refiere que fue declarada la emergencia citrícola en la Provincia de Misiones –lugar donde desempeña su actividad la empresa- mediante decreto 604/2019, a la cual no es ajena. Asimismo, sostienen que la suma reclamada es desproporcionada con la capacidad económica de la empresa, situación que -según señala- se desprende del dictamen contable que acompaña. En cuanto al fondo de la cuestión, sostiene que existió un error del organismo recaudador en cuanto a la apreciación de la prueba, toda vez que la empresa se dedica a la actividad citrícola de producción primaria, plantación, cosecha y comercialización. Debido a la naturaleza de la explotación, conlleva a que efectivamente haya épocas del año en donde se requiere de mayor cantidad de personal y eventualmente personal extraordinario por cuestiones estacionales y el resto de la temporada no requiere

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

de personal. Fue por ello que ante esta situación se contrató el servicio de la cooperativa de trabajo para estas situaciones extraordinarias. También, resalta que, de ninguna manera, la nómina de asociados que figuran en los contratos con las cooperativas fueron personal permanente de CITRICOLA MARIA MAGDALENA S.A., no existiendo subordinación horaria, técnica o remuneración regular que justifique este encuadramiento. En apoyo de su postura cita abundante jurisprudencia.

La demandada en su escrito de réplica resalta el incumplimiento de la exigencia formal del pago del depósito previo previsto en el art. 15 de la ley 18.820, art. 12 de la ley 21.864 y art. 26 inc. b) de la ley 24.463, por lo que entiende, debe ser declarada la deserción del recurso. Subsidiariamente, contesta los agravios vertidos por la parte actora. Manifiesta que el recurso interpuesto no configura una verdadera expresión de agravios, reduciéndose los mismos a una mera disconformidad con la deuda determinada. Relata que el cargo se origina como consecuencia de la causa n° 7227/2013 “DGI s/ SOLICITA ORDEN DE ALLANAMIENTO”, que tramita por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de El Dorado, en la que se solicitó una orden de allanamiento a la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada LTDA” y que la documentación secuestrada en dicho allanamiento fue analizada y clasificada por el personal de la AFIP y remitida al mencionado juzgado, que ordenó al organismo recaudador efectuar la fiscalización correspondiente y determinar la calidad de empleador de la contribuyente, de acuerdo a la nómina obtenida. De este modo, procedió a la determinación de la deuda que aquí cuestiona, tomando como base imponible para el cálculo de aportes y contribuciones el salario mínimo, vital y móvil. A su vez, sostiene que la conducta seguida por la empresa relevada y la documentación obrante en las actuaciones, permite establecer que la cooperativa ha provisto a CITRICOLA MARIA MAGDALENA S.A de personal, cumpliendo las funciones propias de una empresa de provisión de personal, por lo que claramente se ha violentado la prohibición estipulada en el art. 40 de la ley 25.877, por lo que –según considera- la relación existente entre la recurrente y los supuestos asociados es de carácter laboral. También destaca que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), con fecha 18/06/2013, le retiro la autorización para funcionar a la cooperativa “Tierra Colorada LTDA”, mediante resolución 1225/2013 I.N.A.E.S., cuestión que –según entiende- reforzaría su postura.

I.- En primer término, entiendo que más allá del incumplimiento en el pago del depósito previo, corresponde proceder a la apertura de la presente instancia judicial. Ello, en atención a la delicada situación económica de la empresa y la magnitud de los montos en cuestión los que se encuentran debidamente acreditados. En el caso, la capacidad económica de la empresa está respaldada por el informe especial de la contadora pública

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Adriana Ramírez Mieres (Matricula N° 966 del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones), quien avala la imposibilidad por parte de la empresa, de hacer frente al depósito previo aquí bajo análisis, toda vez que el patrimonio neto de la empresa ascendería a la suma de \$ 2.924.853,57.- y el monto reclamado por el organismo asciende a la suma de \$ 14.706.133,20.-.

Si bien, en nuestro derecho positivo, la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la C.N. y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, tal imperativo legal podrá ser atenuado en aquellos casos en que existe una importante desproporción entre la suma reclamada y la concreta capacidad económica del contribuyente (CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938 entre otros), admitiéndose la validez de la presentación de un seguro de caución en sustitución del depósito previo (CSJN 04/11/08 “Orígenes AFJP c/AFIP-DGI” Fallo 331:2480).

Por lo expuesto, corresponde ingresar en el análisis del recurso impetrado.

II.- Ahora bien, el fondo de la cuestión a resolver gira en torno a dilucidar si existió una relación de trabajo encubierta en fraude a la ley laboral y previsional para lo cual, entiendo que debe ahondarse la investigación de modo de objetivar sin margen de dudas la certeza en cuanto se ha verificado un acto simulado y en consecuencia, la procedencia de la sanción que se pretende imponer.

La ley 20.337, en su art. 2°, determina que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. En las sociedades cooperativas se utiliza el trabajo de los socios. Son administradas por éstos sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones, el trabajo sólo puede ser prestado por los asociados, los beneficios son el resultado de una empresa en común que se reparten en forma proporcional, todos participan con un solo voto en la asamblea general y normalmente no pueden tener empleados ajenos salvo en situaciones extraordinarias(V.Gloria M.Pasten de Ishihara, Las cooperativas de Trabajo y la responsabilidad laboral. pub. en Doctrina Laboral abril 1994, pag.287 y ss).

En primer término, debo destacar que resulta llamativo que una empresa de la envergadura en el rubro de que se trata, como “Citrícola María Magdalena S.A.”, que se encontraba vinculada con la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.” por diversos contratos de locación de servicios, manifieste que hace frente a toda una actividad (producción primaria, plantación, cosecha y comercialización), con solo 3 o 5 trabajadores (Ver Recurso de Apelación obrante a fs. 657 vta.) y que, únicamente, debe recurrir a personal extra en algunas semanas del año, por cuestiones estacionales.

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Ahora bien, del análisis de la documental agregada en autos, surge que las contrataciones de estos servicios extraordinarios “estacionales” se han prolongado indefinidamente en el tiempo, lo que claramente le quita su carácter “estacional”. Prueba de ello son los contratos de locación de obra incorporados a fs. 424/543 de donde se desprende la contratación de cooperativas. Allí las entidades asumen el compromiso de dirigir, asesorar técnicamente y ejecutar los trabajos de pulverización de cítricos, monitoreo de plagas, limpieza y macheteada de quinta, plantación, vivero, poda y raleo de frutas, aplicación de herbicidas, control de hormigas, cosecha, transporte de cítricos, cuidado de galpones, mantenimiento y reparación de maquinarias, herramientas, vehículos destinados a la explotación forestal y agropecuaria.

Cabe destacar la diversidad de obligaciones “estacionales” que asume la cooperativa de trabajo -según dichos de la apelante-, ya que varía desde cosecha y siembra a transporte, mantenimiento y reparaciones de galpones y maquinarias. Actividades que en principio parecerían excede el carácter excepcional que se les intenta dar, siendo, a mi entender, parte de la actividad principal de la empresa.

A su vez, también del análisis de la prueba documental cabe hacer mención a los periodos en que se dieron estas contrataciones, teóricamente extraordinarias. A fs. 542/543 se advierte uno de los numerosos contratos celebrados entre la “Cooperativa de trabajo tierra colorada LTDA” y Ricardi Enrique Ranger en representación de “CITRICOLA MARIA MAGDALENA SA”, allí se advierte que se contrata a la cooperativa de trabajo para que asuma los compromisos antes mencionados (ver clausula PRIMERA de todos los contratos), pero lo paradigmático es que esta contratación se realiza desde el día 30/03/2009 y por el plazo de 30 días. Por su parte, se advierte a fs. 539/540 un nuevo contrato de locación de obra entre las mismas partes y por los mismos compromisos, pero esta vez para ser llevados a cabo desde el día 30/4/2009 (fecha de vencimiento del anterior contrato), también por el plazo de 30 días. A fs. 536/537 se adjunta un nuevo contrato de locación de obra entre las mismas partes, con el mismo objeto desde el 30/05/2009, por el plazo de 60 días. A fs. 533/534 se encuentra agregado un nuevo contrato entre las mismas partes, mismo objeto y por el mismo plazo pero desde el 30/07/2009. A fs. 530/531 tenemos un nuevo contrato entre las mismas partes, por el mismo e idéntico plazo pero desde el 30/09/2009. A fs. 527/528, observamos un nuevo contrato entre las mismas partes, por el mismo objeto, pero esta vez por el plazo de 120 días a partir del 30/11/2009. El aludido modus operandi lo reitera a lo largo del tiempo, conforme surge de los contratos obrantes a fs. 524/525, 521/522, 518/519, 515/516, 512/513, pero por el plazo de 180 días; así como los subsiguientes -temporalmente- obrantes a fs. 509/510 y 505/506, para luego volver al plazo de contratación de 90 días en los mismos términos que los anteriores (Ver.

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Fs. 503/503). De este sucinto repaso documental vemos como, al menos desde el 30/03/2009 al 26/01/2013 ininterrumpidamente, rigió entre las partes alguno de los mencionados contratos de locación de obra, lo que sin lugar a dudas, hecha por tierra los pilares argumentales defensivos de la recurrente, tendientes a cubrir con un velo de excepcionalidad de dichas contrataciones.

Por ello, considero que resulta aplicable en el presente caso el principio de primacía de la realidad, en virtud de la cual, conforme reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Nación, se debe indagar la verdad material por encima de la formal, y es tarea fundamental que corresponde al servicio de justicia, desentrañar dicha verdad por sobre las apariencias (conf. CSJN Fallos 288:55; 292:211, 418,485; 295:948; 296:356, 650,729).

Asimismo, las normas vigentes prohíben expresamente a las cooperativas de trabajo la contratación de sus servicios cooperativos "por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados" (dec. 2015/94, art. 1° y, especialmente, sus considerandos). La jurisprudencia ha señalado con claridad, que los miembros de una cooperativa de trabajo "no pueden ser colocados como mano de obra para terceros, porque en ese caso pasan a ser dependientes con todas sus características propias, ya que la cooperativa no es una empresa de servicios eventuales, puesto que esta actividad le está vedada" (dec. 2015/94) (Cámara Nacional del Trabajo, sala VI, 31/10/97, "Espinoza, A.R. c. Bicon Coop. de Trabajo de Vigilancia Ltda.", voto del Dr. Fernández Madrid, con la adhesión del Dr. Capón Filas, D.T., 1998-A, 718).

En el mismo sentido, se ha puntualizado que las cooperativas de trabajo no pueden actuar como colocadoras de personal en establecimientos de terceros, pues esa es una forma de alterar toda la estructura de la ley laboral so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa donde presta servicios (CNTrab., sala I, 23/06/98, "López Aguilar, Víctor c. Comar Coop. de Trabajo Ltda. y otro", DT, 1999-B, 1305). De ello resulta que -como lo sostiene el órgano de gestión- se torna aplicable lo normado por el art. 29 de la ley de contrato de trabajo y, por ello, el trabajador debería ser considerado empleado directo de quien utilice sus servicios. (CNTrab., sala I, 30/11/99, "González, Horacio c. Sila Coop. de Trab. Ltda y otros", DT, 2000-A, 880).

El Decreto 2015/94 dispuso que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa no autorizará el funcionamiento de cooperativas de trabajo que, para el cumplimiento de su objeto social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados (artículo 1°). A su vez, por resolución del INAC 1510/94, se prohibieron los servicios de limpieza, de seguridad, distribución de correspondencia, servicios eventuales y agencias de colocación. Y por ley 25.250 también fueron prohibidos los servicios eventuales, de temporada y de agencias de colocación.

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Más explícitamente, cuando la cooperativa presta servicios en terceras empresas y no en sus propias estructuras, implica que: "...se comporta como una empresa capitalista que brinda trabajadores a terceros, integrando el ritmo de producción ajeno. De ahí que, objetivamente, se manifiesta una situación de fraude, ocultando la relación laboral a través del disfraz cooperativo o, en términos normativos, "aparentando normas contractuales no laborales" (RCT art. 14)" (CNAT, Sala VI, 23/02/2004, "Arzamendia Caballero, Martín c/Cooperativa de Trabajo Seguridad y Vivienda Ltda. s/despido"; jueces Capón Filas - Fernández Madrid).

La empresa que medió en la relación no puede pretextar (pese a su estructura jurídica) que no existe relación laboral con su supuesto "socio", ya que el aporte de éste no lo fue en una tarea propia de la cooperativa, sino que fue a favor de un tercero que contrató con ella. Por lo cual, la presunción de existencia del vínculo laboral en los términos del art. 23 de la L.C.T., que dimana del hecho de haberse encontrado a la persona por la que se impuso la multa por infracción a la ley 11.683 prestando servicios para la actora, no se halla desvirtuado, lo que concuerda con lo normado por el art. 4 de la Ley 26.063 en el ámbito de la seguridad social, en el que "se presumirá salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, por las partes".

De ello resulta que, el presente caso debe ser resuelto a la luz de lo establecido en el art. 23 de la LCT, el cual expresamente establece que "el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo [presunción no desvirtuada en autos]; esta presunción operará aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato y en tanto, por las circunstancias, no sea dado calificar de empresario a quien presta servicios".

La contratación fraudulenta de trabajadores, mediante el uso de "hombres de paja" o testaferros es puesta en jaque por el artículo 29 de la LCT, que sobre el particular establece que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios, responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y las que se deriven del régimen de seguridad social.

Por último, debe tenerse presente que se ha considerado operativa la directiva del art. 102 de la LCT en sede previsional ante situaciones de fraude al detectarse la intermediación laboral a través de empresas ficticias apoyadas en supuestos contratos de

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

locación de obra que no son tales (conf. esta Sala sent. del 23/03/2012 “Santa Cruz Lanas SRL c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/Impugnación de Deuda).

Con lo cual, a todas luces es innegable que esta modalidad de contratación fue utilizada con la única finalidad de encubrir una verdadera relación laboral entre las partes, quedando acreditada la estrecha relación entre las tareas realizadas por los trabajadores inspeccionados y la actividad específica de la impugnante. Es por ello que entiendo que debe confirmarse la resolución recurrida, toda vez que no se advierte elemento alguno que permita variar lo decidido en la instancia administrativa ni desvirtuar sus fundamentos, en relación con el hecho generador de la infracción imputada.

III.- En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al vencido, conforme art. 68 del C.P.C.C.N. y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

IV.- Con respecto a la regulación de honorarios, que imponen los artículos 163 y 164 del C.P.C.C.N., cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica, dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo, sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320;495;339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. 'c;/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. del 4 de septiembre de 2018).

Con lo cual, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional interviniente, tomando en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo” (voto del Dr. Carlos S. Fayt).(CSJN T. 315 , P. 1620)

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#34480542#377789011#20230912153437975



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. del 4 de septiembre de 2018).

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 27 UMA, equivalente a \$ 522.126 -pesos quinientos veintidós mil ciento veintiséis- y 122 UMA a la dirección letrada de la parte demandada, equivalente a \$ 2.359.236 -pesos dos millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y seis- (valor UMA 19.338 conf. Acordada 19/2023) (art. 1.255 Cód. Civ. y Ccial de la Nación), sumas que no incluyen I.V,A, el que deberá adicionarse en caso de corresponder (Cfr. Excma. C.S.J.N. “Cia. General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” Sentencia del 16/06/93, Fallos 316:1533).

Por todo lo expuesto propicio: 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas a la impugnante (art. 68 C.P.C.C.N.), 4º) Regular los honorarios de de la dirección letrada de la parte actora en 27 UMA, equivalente a \$ 522.126 -pesos quinientos veintidós mil ciento veintiséis- y 122 UMA a la dirección letrada de la parte demandada, equivalente a \$ 2.359.236 -pesos dos millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y seis- (valor UMA 19.338 conf. Acordada 19/2023). (art. 1.255 Cód. Civ. y Ccial de la Nación), sumas que no incluyen I.V,A, el que deberá adicionarse en caso de corresponder (Cfr. Excma. C.S.J.N. “Cia. General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” Sentencia del 16/06/93, Fallos 316:1533).

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero a las conclusiones arribadas en el voto que antecede.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Juan Fantini.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas a la impugnante (art. 68 C.P.C.C.N.), 4º) Regular los honorarios de de la dirección letrada de la parte actora en 27 UMA, equivalente a \$ 522.126 -pesos quinientos veintidós mil ciento veintiséis- y 122 UMA a la dirección letrada de la parte demandada, equivalente a \$ 2.359.236 -pesos dos millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y seis- (valor UMA 19.338 conf. Acordada 19/2023). (art. 1.255 Cód.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Civ. y Ccial de la Nación), sumas que no incluyen I.V,A, el que deberá adicionarse en caso de corresponder (Cfr. Excma. C.S.J.N. “Cia. General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” Sentencia del 16/06/93, Fallos 316:1533).

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

JSM

